LA DEMOCRACIA APLAZADA SUS RIESGOS*

Ramiro Bautista R.

El Estado mexicano adopta, desde principios del siglo pasado, los lineamientos característicos que corresponden al Estado Democrático Liberal y, por lo mismo, uno de los rasgos sobresalientes de su estructuración constitucional es la necesaria presencia de la democracia política.

En su operación práctica nuestra democracia política se fue desenvolviendo con mucha dificultad a lo largo del siglo pasado y en el proceso de la dictadura porfirista fue materialmente eliminada, constituyendo ese hecho una de las razones que provocaron la revolución.

La Revolución Mexicana planteó, a través de los principales planes, programas y manifiestos generados por el magonismo, el maderismo, el zapatismo, el carrancismo, el villismo y el obregonismo. Así como en los debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, varias decenas de postulados políticos entre los que sobresalen -además de la No Reelección los siguientes:

Primero: El Sufragio Efectivo. Por el hecho de que, "en las contiendas políticas la voluntad del pueblo debe respetarse".

Segundo: El derecho que tiene el pueblo mexicano de "desconocer y luchar contra autoridades emanadas del fraude electoral o la imposición".

Tercero: La vigencia de la Soberanía Popular. Por la "necesaria intervención de todos en la cosa pública".

Cuarto: Que los habitantes de la ciudad de México puedan elegir a sus autoridades, y,

Quinto: Acabar con el fenómeno del presidencialismo, como degeneración del sistema presidencial.

* Este artículo es una derivación del libro que con el mismo título le fue publicado al autor por la Editorial Pueblo Nuevo. Asimismo, la evolución de nuestra sociedad llevó a que la misma revolución lograra una redefinición de nuestro esquema constitucional al incorporar, sobre el diseño liberal individualista, los derechos sociales; las definiciones básicas para que los gobiernos se guiaran, en lo sucesivo, a satisfacer las necesidades económico-sociales de las mayorías que con más de un millón de muertos habían desarrollado la lucha armada.

Así, para el futuro mediato se presentaban dos metas que cumplir a la revolución hecha gobierno: a) la satisfacción, de las necesidades económico-sociales de la población y, b) el ejercicio democrático del poder. Esta conjunción se plasmó después en el artículo 3/ o constitucional al definir a la democracia mexicana "...no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".

Desde el gobierno carrancista se presentaron avances, estancamientos y desviaciones, en el marco de una profunda corrupción institucional sólo frenada en el sexenio cardenista. En dicho lapso se integró el partido oficial, mismo que después de ejercer una legítima hegemonía por varias décadas fue perdiendo consenso hasta llegar a una caída drástica a fines de los ochenta.

A pesar de que en esta etapa casi nunca funcionó la democracia política, en los procesos de urbanización-industrialización y de reparto efectivo de tierras se presentaron diversas vías de capilaridad social para los sectores mayoritarios de la población.

En los últimos sexenios, sin embargo, irrumpieron con fuerza las limitaciones de modelo vigente hasta desembocar en una crisis económico que está afectando gravemente el nivel de vida de las clases medias y populares. Un poco antes, durante el régimen de Díaz Ordaz habían sido ya instrumentadas medidas tendientes

a frenar los intentos democratizadores de la sociedad, convirtiendo en referencia histórica ineludible a la barbarie oficial puesta en práctica el 2 de octubre de 1968.

La Apertura Democrática echeverrista con "el diálogo" como su figura central, estuvo en lo inmediato condicionada por la necesidad oficial de buscar alivio a la tensión social y sus secuelas de enfrentamiento que provocara la política represiva del diazordacismo. La Reforma Política de López Portillo en cambio, estuvo más bien condicionada por la necesidad de ofrecer a la sociedad civil alternativas de participación política en compensación a su deterioro económico.

La preocupación de fondo era evitar, la violencia y el temor no era infundado: si por los sucesos del 68 que en términos generales habían tenido como principales actores a los sectores estudiantiles de nivel superior de la capital de país se había producido una respuesta de orientación revolucionaria en múltiples intentos de lucha armada en el campo y en las ciudades, ¿que podía esperarse cuando la crisis producía por primera vez en muchos años una afectación tan fuerte y directa en el nivel de vida y expectativas de las más amplias capas laborantes a lo largo y ancho de la república?

No obstante, el gobierno lopezportillista frenó rápido la idea de democratizar la vida nacional pues muy poco tiempo después de haber adquirido tal compromiso tuvo entre sus manos la casi milagrosa aparición de cuantiosa reserva petrolera con la que, creyó, podría resolver los problemas.

Ya sabemos cómo se vinieron abajo las ilusiones oficiales fincadas en la exportación de crudo y del gas natural y cómo la deuda contraída para tales fines, aunada a la heredada, se convirtió en la máxima carga sobre el pueblo mexicano.

En el sexenio de Miguel de la Madrid se profundizó la crisis económica y su equipo de gobierno, con Salinas de Gortari a la cabeza se encargo de implementar las líneas de acción trazadas por el FMI mismas que, entre sus consecuencias inmediatas avanzaron fuertemente en el desmantelamiento del provecto generado por Revolución Mexicana. Esto. traducido impresionante deterioro del nivel de vida del pueblo imponía, de acuerdo a la lógica oficial, la indispensable instrumentación de una reforma política profunda.



Sin embargo el proceso de Renovación Político Electoral delamadrista fue muy limitado a pesar de que aportó cambios a nivel municipal, un Código Federal Electoral, la Asamblea de Representantes de D.F. y el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pues también tuvo algunas regresiones formales como el haber eliminado el referéndum que ya se apuntaba constitucionalmente y, lo peor de todo fue que a pesar de haberse comprometido a no sólo perfeccionar el sistema electoral, sino a democratizar todos los ámbitos de la vida social, terminó conservando en la práctica política oficial los tradicionales vicios de la alquimia electoral priísta, mismos que se acrecentaron con una exagerada manipulación informativa. cinismo gubernamental. el la marginación de la Suprema Corte, la gestión de reconocimientos anticipados en el extranjero. degradante beligerancia presidencial, los asesinatos ligados a lo electoral, etc.

En el sexenio actual en general subsisten los mayores problemas nacionales: cada vez son peores las condiciones de la mayoría de los mexicanos en alimentación, empleo, vivienda, salarios, salubridad, educación, vestido, justicia, seguridad, recreaciones y ecología. Todo esto a más de un año de que Carlos Salinas se hubiera comprometido solemnemente: "Volveremos a crecer, pero no esperaremos a la recuperación para iniciar el camino hacia la justicia y la equidad".

Y si en lo social existe tal incumplimiento a pesar del crecimiento económico ya anunciado y de los "pactos" que han estado vigentes, en lo político sucede algo similar. Las decisiones que sobre la democracia política aportó la Revolución Mexicana están muy lejos de ser llevadas a la práctica a pesar de que en este terreno las promesas también fueron trascendentes: "La garantía más urgente en el ámbito político (dijo Salinas) es la transparencia de los procesos electorales. Comparto esa inquietud ciudadana".

No obstante, en lo que va del lº de Diciembre de 1988 a la fecha se han instrumentado escandalosos fraudes electorales en varios Estados de la república y en lo formal luego del gran servicio que al PRI le hiciera el PAN está por concluirse otro sistema legal electoral antidemocrático.

Y mientras en el ámbito oficial la línea claramente dominante se opone a la democratización del país y desecha la posibilidad de llevar a la práctica el Sufragio Efectivo y los demás postulados políticos de la Revolución, el cardenismo en cambio va conformándose como la opción antagónica al priismo, entre otros motivos, por enarbolar el rescate de las banderas revolucionarias que éste está estructuralmente imposibilitado de practicar, pues a estas alturas ye le resultan autodestructivas.

En este marco, los sucesos desencadenados a partir de la última contienda electoral presidencial y sus secuelas, han llevado a que el PRD caracterice como ilegítimo al ejecutivo federal, lo que le ha generado un enorme rencor oficial que se manifiesta en una enfermiza intolerancia apenas disimulada.

Contra el PRD parecen haberse dictado ya las peores consignas desde las más altas esferas del poder nacional: trabas de todo tipo, satanización, calumnias, fraudes electorales, encarcelamientos injustos y, lo más grave, se ha recurrido ya al asesinato casi oficializado de sus miembros.

Todos los elementos antes anotados se conjugan para hacer que la nota sobresaliente de la coyuntura nacional sea hoy, muy destacadamente, el peligro de la violencia.

Dicha posibilidad está cada vez más cerca y gira alrededor de la confrontación de dos proyectos de país que chocan entre sí: a) el proyecto que encabeza la tecnocracia gobernante, de rasgos "modernizadores" y un sustrato marcadamente desnacionalizador y antipopular y, b) el proyecto que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, encaminado a rescatar y actualizar los valores esenciales de la Revolución Mexicana.

El movimiento emergente es potencialmente muy poderoso y va mucho más allá de lo formalmente incorporado al PRD: son los vastos sectores sociales golpeados por la crisis y de tan variadas formas agraviados por el aparato oficial que, en una acción sin precedentes, han generado ya la expresión fehaciente de su repulsa al sistema establecido. Tal fenómeno se ha conjugado con una especie de reavivamiento de lo más profundo de nuestra idiosincrasia, que resalta espontánea y admirablemente en las concentraciones cardenistas a través de un haz de símbolos muy significativos en nuestra cultura: el sol, la bandera nacional y la Virgen de Guadalupe. Por sí fuera poco, a lo anterior se añade un estado de ánimo, una fe y un entusiasmo como no se han vivido en muchas décadas y, como remate, el hecho de que nuestro pueblo ha generado su líder y que éste, en su conducta cotidiana se conduce con los rasgos característicos de nuestros libertadores: sencillez, seriedad, claridad de propósitos, tenacidad...

Tratar de prever cuál es a mediano plazo la perspectiva de la confrontación nacional que estamos viviendo nos obliga, de manera natural, a revisar nuestras más trascendentes luchas para detectar las principales vías de acción que históricamente ha utilizado el pueblo mexicano para zanjar sus diferencias en las disputas por el poder republicano.

Como ahora, los casos más sobresalientes se detectan cuando, tras la disputa por el poder, se encuentra la confrontación de dos proyectos de país que chocan entre sí: liberales contra conservadores en el siglo pasado y corrientes que buscan la transformación social contra aquellas que sólo buscan cambios políticos en la Revolución Mexicana.

Lo medular de la revisión se cifra en el análisis de la lucha de Vicente Guerrero contra Gómez Pedraza, la rebelión de Santa Anna contra Mariano Arista, el Plan del



Hospicio, el Plan de Ayutla, el Plan de la Noria, el Plan de Tuxtepec, el Plan de Palo Blanco, el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, y el Plan de Guadalupe, Las Reformas al Plan de Ayala y al Plan de Agua Prieta. Varios de estos casos tienen también, en lo inmediato, la característica de plantear luchas que se desencadenan como respuesta a un fraude electoral.

Un resumen de los diez casos nos muestra, objetivamente, que el *modus operandi* de la fuerza emergente en estas confrontaciones presenta los siguientes datos:

-Cuatro casos giran en torno a cuestiones electorales. En tres de ellos se manifiesta un expreso desconocimiento de los resultados electorales oficiales, mientras que en el cuarto no se llega a este nivel debido a que finalmente no se realiza la imposición del candidato preferido por el presidente en funciones.

-Además de los tres casos en que se desconocen los resultados oficiales de la elección; en los otros siete, lo que se hace es desconocer al presidente de la república en funciones.

-Si decimos de otro modo lo que corresponde a los dos puntos anteriores, vemos que los diez casos tienen, en el fondo, la decisión de desconocer al Ejecutivo Federal; bien que se encuentre en funciones o haya sido declarado electo.

-En cinco de los casos se nombra a un presidente de la república de parte del movimiento emergente, como una base esencial para ir conformando ya un nuevo gobierno.

-Finalmente, lo que muestran en común los diez casos, es que en todos ellos se recurre a llamar al pueblo a las. armas con el objeto de dar sustento verdadero, material, a las medidas políticas planteadas.

Por lo que hace a los resultados, de los diez casos revisados fracasa uno, que no logra sus objetivos; otro se desvanece por la acción de terceros que eliminan físicamente al presidente en funciones mientras que, el resto, ocho casos, logran sus objetivos convirtiéndose en movimientos emergentes triunfantes.

Todas estas luchas son aleccionadoras y conforman,

quiérase o no, métodos de acción pertenecientes a la cultura política del pueblo mexicano; no pueden por tanto ser ignorados en circunstancias como las que estamos viviendo. No son vías deseables, pero en muchas ocasiones se le han impuesto a nuestro pueblo como indispensables.

Resulta evidente que la vía óptima de solución para todos nuestros problemas comienza en la democratización de la vida política nacional, a pesar de que tal posibilidad está alejándose a partir de las reformas constitucionales que convinieron el PRI y el PAN.

Si se insiste en volver a aplazar la democracia, y al PRI se le reconstituye en el gobierno, tal como se ha hecho hasta ahora, con todos sus vicios, como si fuera el dueño del poder y del patrimonio nacional, nos estaría conduciendo a senderos peligrosos porque, a nuestro juicio, sólo quedarían dos caminos:

a) Que la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas se aferre a la mera lucha electoral. Un supuesto de este tipo, creemos, provocaría lo siguiente:

-Ante pleno cinismo oficial, seguiría creciendo el abstencionismo electoral que de por sí ya es muy alto en este momento.

-La actitud abstencionista sería, obviamente, de inconformidad hacia él gobierno; lo cual no implicaría, forzosamente, un apoyo a la contraparte.

-El PRD, con la línea de acción que tiene de oposición vertical, mantendría un gran prestigio en principio, pero a lo largo del tiempo su eficacia real se vería estancada si no tuviera la visión de rebasar con gran amplitud su quehacer electoral, que es lo que ocupa en este momento su acción casi única.

-De manera natural, por las circunstancias anteriores, y aunque el deterioro económico del pueblo persistiera, el carisma de Cuauhtémoc Cárdenas iría menguando paulatinamente.

-Los sectores más vastos del pueblo se encaminarían hacia un mayor alejamiento de la lucha y entrarían en una pasividad cada vez más frustrante.

-Como contrapartida, todo lo anterior llevaría, a lo más consciente de la juventud luchadora, dentro de PRD y fuera de éste, a romper con Cárdenas y a lanzarse a la violencia desesperada, en grupos aislados y al margen de las grandes masas.

-De manera Natural, los aparatos coercitivos de Estado -legales e ilegales—se fortalecerían brutalmente y volverían a repetirse, pero en un volumen muy superior, hechos al estilo de los que vivió el país de mediados de los sesenta y mediados de los setenta: cacerías de brujas, allanamientos, secuestros, tortura, desapariciones, asesinatos políticos, exilios, asaltos de diverso tipo, celulismo radicalizado y hasta terrorismo.

-Una situación como la anterior traería aparejada una gran influencia política del elemento militar y policíaco: México como un Estado policíaco cada vez más lejos de la democracia.

-Los recursos económicos, de por sí muy escasos, se canalizarían mayormente a las medidas de "seguridad nacional".

-Crecería la influencia de los Estados Unidos, del sector de los "halcones" de los Estados Unidos, sobre el gobierno mexicano.

-El pueblo, en general, estaría al margen del grupismo armado, cada vez más empobrecido, desorientado y, lo que sería más grave de todo, sin dirección, sin perspectiva, sin esperanza.»

-El grupismo armado no tendría posibilidades de triunfar, la desmovilización popular sería su gran contrapeso; además, los aparatos de coerción estatal permanecerían de manera muy firme y compacta, sin fisuras, en apoyo del gobierno.

-¿Una situación como la anterior haría del pueblo un ente respetado y atendido? Desde luego que no; sería un pueblo bajo sospecha, espiado, golpeado en sus mejores hijos, reprimido, obligado por la fuerza a ser cauto, desconfiado. Se afectaría severamente nuestra calidad de "pueblo", de ente activo políticamente.

-La más trágica de las consecuencias sería que se estarían sentando las bases para el envilecimiento nacional por algunas generaciones.

-circunstancias de este tipo lo ubicarían con su dignidad disminuida, alejado de su tradición histórica de lucha.

-Esta parece ser la apuesta del PRI-gobierno; crear las condiciones para detentar al infinito el poder compartiéndole espacios menores al PAN, sobre una población envilecida, tan indigna como el propio poder impuesto sobre ella.

b) El otro supuesto es que, ante la cerrazón, ilegalidad e ilegitimidad oficiales, la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas plantease una salida apegada a los cánones de nuestra historia: por la vía de la violencia armada. ¿Existen condiciones para ello? Pensamos que sí. Creemos, además, que los rasgos de una situación de este tipo serían muy diferentes a los que caracterizan a un pueblo sometido, aunque, es obvio, se pagaría el enorme costo social que implica la existencia de un pueblo sublevado.

¿Qué es peor; un pueblo envilecido, degradado, o un pueblo sublevado?

Son éstos los riesgos a los que nos está llevando el gobierno federal, son los riesgos a que nos conduce la tecnocracia encabezada por Carlos Salinas de Gortari. Son los riesgos de querer, de una nueva cuenta y de manera impune, volver a aplazar la democracia.